

La ratificación de este Protocolo o la adhesión al mismo se efectuará mediante el depósito de un instrumento de ratificación o de adhesión en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.

Artículo 4

El presente Protocolo entrará en vigencia, para los Estados que lo ratifiquen o se adhieran a él, a partir del depósito del correspondiente instrumento de ratificación o adhesión en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

El artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional faculta al Congreso de la Nación a incorporar con jerarquía constitucional los tratados y convenciones sobre derechos humanos, una vez aprobada por ley.

En este sentido el Honorable Congreso de la Nación debe aprobar por ley el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos Relativo a la Abolición de la Pena de Muerte previo a la sanción de la presente, pero su inclusión como parte del sistema constitucional que ampara en el país los derechos fundamentales de la persona humana nos obliga a no demorar la presentación del presente proyecto y posibilitar así su tratamiento conjunto.

En atención a que la Constitución Nacional, reformada en 1994, ha privilegiado la defensa de los derechos humanos, y teniendo en cuenta que el constituyente, en el segundo párrafo del artículo 75, inciso 22 de la norma fundamental, ha incorporado con jerarquía constitucional diversos tratados y convenciones de protección de los mismos, consideramos necesario asignarle dicha jerarquía a la presente convención.

El protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos Relativos a la Abolición de la Pena de Muerte fue aprobado en Asunción, Paraguay, el 8 de junio de 1990, en el vigésimo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA (Organización de Estados Americanos), entró en vigor el 28-8-95 y fue firmado por los siguientes países: Ecuador (el 27-8-90), Nicaragua (el 30-8-90), Venezuela (el 25-9-90), Uruguay (el 2-10-91), Panamá (el 26-11-90), Costa Rica (el 28-10-91) y Brasil (el 6-4-94) en el vigésimo cuarto período ordinario de sesiones de la Asamblea General.

De estos siete países ratificaron a la fecha Panamá (28-10-93), Uruguay (4-4-94) y Venezuela (6-4-93).

El mencionado instrumento fortalece los principios consagrados en las otras convenciones sobre la eficacia y vigencia real de los derechos fundamentales de las personas y, por ende, complementa el sistema de garantías del Estado de derecho en nuestro país, por lo que se proyecta en el presente refrendar y ratificar dicho protocolo previo a su elevación con jerarquía constitucional.

La Argentina ha refrendado e incorporado a la Constitución Nacional el Pacto de San José de Costa Rica en cuyo artículo 4º se promueve la abolición de la pena

de muerte. En numerosas declaraciones y documentos el país ha reafirmado su posición contraria a la pena de muerte y así lo ha mantenido en forma permanente, en todos los foros nacionales e internacionales.

Alfredo H. Villalba. — Dolores C. Domínguez. — Mary Sánchez. — Marcela A. Bordenave. — Juan P. Caffero. — Nilda C. Garré. — Elisa M. Carrió. — Alfredo P. Bravo. — Elisa B. Carca.

—A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, de Derechos Humanos y Garantías y de Asuntos Constitucionales.

21

Proyecto de declaración

La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Deportes de la Nación, otorgue un subsidio no reintegrable al Club Atlético Libertad de la ciudad de Gualaguay, provincia de Entre Ríos, con destino a la finalización de obras de sanitarios, mampostería y pisos, que dicha institución deportiva viene realizando con gran esfuerzo y cuyos beneficiarios son los ciudadanos de nuestra ciudad.

Pedro J. Galante. — Miguel A. Bonino. — Carlos A. Fabrisin.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

Desde hace muchos años, los directivos, afiliados y simpatizantes del Club Atlético Libertad de la ciudad de Gualaguay, provincia de Entre Ríos, vienen luchando sin claudicar, para concretar un viejo anhelo: finalizar las obras de su querida institución; la misma ha sido lograda en gran parte, falta la correspondiente a sanitarios, pisos y mampostería.

Ellos han agotado sus reservas económicas, a pesar del gran esfuerzo que realizan para continuar. Es justo y necesario que, a través de la Secretaría de Deportes de la Nación, se le otorgue un subsidio no reintegrable, para la finalización de los mismos.

Todos sabemos que las instituciones deportivas amateurs, no reciben apoyo del gobierno nacional, provincial y municipal, sólo subsisten gracias al aporte solidario tanto económico, como dedicando horas de su descanso a trabajar en las obras encaradas por las instituciones, sabemos que tienen como destinatarios a los ciudadanos de la ciudad de Gualaguay.

Por las razones expuestas, señor presidente, es que solicito a esta Honorable Cámara de Diputados la aprobación del presente proyecto de declaración.

Pedro J. Galante. — Miguel A. Bonino. — Carlos A. Fabrisin.

—A la Comisión de Deportes.

5323-D-97

22

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, ...

Artículo 1º—Elévese el mínimo de la pena de los artículos 119 y 123 del Código Penal a ocho (8) años y el máximo a veinticinco (25) años. Pudiendo aplicarse lo dispuesto por el artículo 52 del Código Penal.

Art. 2º—Se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52 en los casos que contemplan los artículos 122 y 124 del Código Penal.

Art. 3º—Elimínase del artículo 120 del Código Penal, el texto "mujer honesta".

Art. 4º—Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Oscar Sat.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

En la actualidad, los casos de violaciones—algunos con características realmente aberrantes—nos obligan a elevar las penas que establece nuestro Código Penal, para estos delitos.

Cuando las víctimas son menores de 12 años o están privadas de razón o por cualquier otra causa no se pudieren resistir, incluida la fuerza o intimidación ejercida por el autor (que son los tres supuestos contemplados en los incisos del artículo 119 del Código Penal), la pena es de reclusión o prisión de 6 a 15 años, por lo que no son pocos los casos en que los violadores reinciden, luego de cumplir su condena.

Si a esto le agregamos que gobernadores y presidentes, por disposiciones constitucionales, pueden conmutar o reducir penas y además que, conforme los regímenes carcelarios, con buena conducta los reos pueden obtener también la libertad extramuros y condicional, mucho antes del cumplimiento efectivo de la condena, comprendemos la indignación de muchas víctimas y de sus familiares, cuando ven que el autor de la violación se encuentra en libertad.

Asimismo, según estadísticas, las reincidencias en esta clase de hechos se da en un alto porcentaje.

Sabemos que el aumento de las penas no siempre disminuye los delitos, pero en el caso de la violación y el estupro, sin lugar a dudas, con el aumento de las penas reducimos la posibilidad de reincidencia.

Por estas razones, es que entendemos conveniente aumentar las penas para los casos de los artículos 119 y 123 del Código Penal (este artículo contempla los casos de estupro, acceso carnal con consentimiento de la víctima, mayor de 12 años y menor de 15), imponiendo como mínimo reclusión o prisión de 8 años y como máximo 25 años, pudiendo los jueces aplicar el artículo 52 del Código Penal; reclusión por tiempo indeterminado.

Y en los casos que establecen los artículos 122 y 124 del Código Penal (cuando se causare un daño grave en la salud de la víctima y la violación la cometiere un familiar, sacerdote, encargado de la educación o

guarda o con el concurso de dos o más personas y, en cualquier caso cuando de la violación resultare la muerte de la víctima) entendemos que la prisión o reclusión debe ser perpetua y los jueces deben tener también la posibilidad de aplicar lo dispuesto por el artículo 52 del Código Penal.

Además, consideramos que el artículo 120 del Código Penal al hablar de "mujer honesta", hace una discriminación por sexo y conducta, inaceptable en la actualidad, por lo que proponemos la eliminación del texto "mujer honesta" en el artículo citado.

Es por los motivos expuestos que solicitamos a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto de ley.

Oscar Sat.

—A las comisiones de Legislación Penal y de Familia, Mujer y Minoridad.

23

Proyecto de declaración

La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

1º—Que esta Honorable Cámara vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional dé instrucciones al ministerio respectivo a fin de que proceda a la rescisión de la concesión otorgada a la firma BAP S.A., respecto a las líneas ferroviarias que comprenden: General San Martín y remanente de la línea Domingo Faustino Sarmiento.

2º—Que dé instrucciones al ministerio respectivo para que inicie las acciones legales por daños y perjuicios contra la concesionaria BAP S.A.

Oscar Sat.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

Por el decreto 605 de fecha del 27 de julio de 1997 el Poder Ejecutivo nacional emplazó a todos los concesionarios de líneas ferroviarias, a fin de que cumplieran con los pliegos y/o renegociaran las condiciones de los mismos.

Sin embargo la firma BAP S.A., que tiene la concesión ferroviaria al sur de la provincia de Mendoza—ramales General San Martín y remanente de la línea Domingo Faustino Sarmiento—, no ha realizado ningún acto útil que demuestre su intención o interés en reactivar el servicio ferroviario correspondiente.

Recordemos que el concesionario BAP S.A. declara por medio de acta de toma de posesión firmada con el Estado nacional—representado a través del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos (el concedente)—en fecha 26 de agosto de 1993, que a partir de las 17 horas del día citado, toma posesión del sistema ferroviario concedido, manifestando cumplir con cada una de las obligaciones a su cargo.